



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitían acceder al original

Área de Conservación de Montes
Subdirección General de Gestión Territorial
Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal
CONSEJERÍA DE MEDIOAMBIENTE,
AGRICULTURA E INTERIOR

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL ENCARGO DEL SERVICIO “TRABAJOS DE APOYO PARA LA DEFENSA DE LOS MONTES CUYA GESTIÓN ESTÁ ENCOMENDADA A LA COMUNIDAD DE MADRID (AÑOS 2025-2027)”

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DE LAS ACTUACIONES DEL ENCARGO

La superficie forestal de la Comunidad de Madrid ocupa 442.416 ha (55 % del territorio de la Comunidad), de las cuales 148.034 ha corresponden a superficie pública y el resto a propietarios privados. Entre los montes de propiedad pública, destacan los 208 montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública (C.M.U.P.) de la Comunidad de Madrid. Su superficie pública total asciende a 96.873,85 ha y su gestión corresponde a la Comunidad de Madrid con la excepción del Monte del Pardo (14.227,38 ha), cuya gestión se encuentra enteramente adscrita a Patrimonio Nacional.

Por tanto, la Comunidad de Madrid gestiona, de acuerdo a lo establecido en la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, un total de 207 montes del C.M.U.P. con una superficie de 82.646,47 ha. Teniendo en cuenta el régimen especial de protección que la inclusión en el C.M.U.P. confiere a estos montes, es preciso defender la propiedad de los mismos, de los intentos de intrusismos, ocupaciones ilegales, etc.

Así, en el artículo 2 de la Ley 16/1995 se establece que “Para el cumplimiento de los objetivos previstos en el punto anterior (1), la Comunidad de Madrid podrá ejercer las siguientes acciones:

d) Defensa de la propiedad forestal de utilidad pública”

y el artículo 10 “Gestión de los montes de Régimen Especial, establece que *Los montes catalogados de utilidad pública serán gestionados por la Comunidad de Madrid, con el alcance establecido en el artículo 22, debiendo ser informadas las entidades propietarias de las resoluciones relativas a la gestión de los mismos.*

Y en su artículo 22. “Gestión de los montes a cargo de la Comunidad Autónoma de Madrid.

1. Corresponde a la Comunidad de Madrid la administración y gestión directa de los montes o terrenos forestales siguientes:

a) Los pertenecientes a la Comunidad de Madrid

b) Los montes del Estado cuya gestión ha sido transferida a la Comunidad de Madrid.

c) Los montes catalogados de Utilidad Pública cuyo titular es una entidad local.

d) Los incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, así como otros montes de titularidad pública, cuando exista consorcio o convenio de colaboración con las entidades propietarias.”

La Ley de Montes 43/2003, de 21 de noviembre, y sus modificaciones posteriores, en su capítulo III, habla de recuperación posesoria y deslinde de montes públicos y determina la potestad de la administración gestora, para el deslinde administrativo de montes junto a los titulares de los montes públicos.

Asimismo, la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, en su TÍTULO V, Capítulo II de defensa demanial y del uso forestal, en su sección primera de defensa del dominio público determina la potestad para el deslinde administrativo de montes a la Comunidad de Madrid.

En uso de esta potestad compete a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior la realización de los trámites administrativos necesarios para llevar a cabo los procedimientos de defensa de la propiedad forestal en la Comunidad de Madrid, en cuanto a límites, cabida y titularidad, protegiéndolos de este modo de posibles intrusiones y roturaciones. Dentro de la organización de dicha Consejería, desde el año 2014 corresponde al Área de Conservación de Montes, dependiente de la Subdirección General de Gestión Territorial, la realización de dichos trámites.

Actualmente hay unas 335 ocupaciones temporales vigentes en montes catalogados y de ellas, 242 sujetas a canon (21 expedientes corresponden a montes propiedad de la Comunidad de Madrid), que suponen unos ingresos de 530.000€ (8.600€ corresponden a montes propiedad de la Comunidad de Madrid). Se tramitan unos 25 expedientes de concesiones administrativas al año, tanto nuevas como modificaciones o caducidades por vencimiento de plazo u otras circunstancias.

Por otra parte, como circunstancia extraordinaria, existe actualmente en el Área de Conservación de Montes un elevado número de expedientes de concesiones administrativas otorgadas para la ocupación temporal en montes de utilidad pública cuyo plazo de vigencia ha finalizado o vence en los próximos meses, tratándose algunas de ellas de concesiones otorgadas hace más de 99 años. Por ello, como paso previo al inicio del expediente de declaración de extinción del derecho procede revisar la cartografía y datos asociados al derecho para poder iniciar el procedimiento de declaración de extinción por caducidad ya que los expedientes tan antiguos no disponen de cartografía digital sino en formato papel.

Añadido a lo anterior, el exceso extraordinario y puntual de los trabajos descritos anteriormente se traslada a su vez a una mayor litigiosidad derivada de las resoluciones de caducidad de los derechos concesionales. En concreto, existen algunos expedientes de elevada complejidad que se tramitan en la Unidad Técnica del Plan Forestal en los que los interesados han interpuesto múltiples recursos de reposición así como recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como es el caso del tercer expediente de la declaración de caducidad por finalización del plazo de la ocupación temporal de terrenos de los montes nº 25, 32 y 33 del C.U.P., propiedad de los Ayuntamientos de Cercedilla y Navacerrada, con destino a la construcción de sanatorios de altura (expediente OCU.023.A). Este expediente, resuelto en septiembre de 2024 y que comprende hasta 900 interesados ha sido objeto de la interposición simultánea de 329 recursos de reposición, así como, por el momento, 43 recursos contencioso-administrativos simultáneos por parte de los interesados. Dada su complejidad y volumen de trabajos a realizar, así como necesidad de dar una respuesta rápida acorde con los estrictos plazos fijados por los tribunales y la legislación vigente, es fundamental contar con el apoyo técnico altamente especializado de este encargo

Por ello, se requiere, de forma puntual y con carácter extraordinario, de un apoyo técnico-jurídico con conocimientos especializados en defensa del demanio así como un apoyo técnico puntual con conocimientos especializados en sistemas de información geográfica para georreferenciar las superficies ocupadas y completar las bases de datos ligadas al mismo, que no puede ser abordado en la actualidad por el personal propio del que se dispone.

El importante esfuerzo que la Comunidad de Madrid pretende abordar para la activación de la gestión forestal sostenible, y en particular, de la regularización de los usos, digitalización de los datos y cartografía disponibles con objeto de mejorar el conocimiento y la gestión de los montes a su cargo, requiere de la dedicación de personal altamente especializado en el manejo de documentación histórica ligada a la gestión y propiedad de los montes gestionados, así como el manejo de documentación ligada a concesiones administrativas correspondientes a la ocupación de montes públicos incluidos en el Catálogo de montes de utilidad pública.

TRAGSATEC cumple los requisitos para ser medio propio según los criterios establecidos en el artículo 32 de la LCSP y en el artículo 86.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Por tanto, TRAGSATEC, además de disponer de medios suficientes e idóneos para realizar las prestaciones del encargo, es una opción más eficiente que la contratación pública y resulta sostenible y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad económica y está sujeta a control de eficacia la comprobación de la concurrencia de estos requisitos. Por tanto, TRAGSATEC dispone de los conocimientos, experiencia, medios técnicos y personales especializados y capacidad económica necesarios para la óptima realización del objeto del encargo en términos de eficiencia y rentabilidad económica, siendo compensada por tarifas que reflejan sus costes reales.

De esta manera, el encargo resulta una figura más idónea frente a otras formas posibles de suplir las necesidades a cubrir, siendo que se siguen los criterios de tarifas establecidas para TRAGSATEC, además de ser el formato más eficiente en cuanto a plazos de adjudicación y contar con los medios personales técnicos especializados necesarios para la adecuada ejecución del encargo.

OBJETO DEL ENCARGO

El objeto de la presente memoria es la justificación de que la actividad a desarrollar mediante el encargo del servicio “TRABAJOS DE APOYO PARA LA DEFENSA DE LOS MONTES CUYA GESTIÓN ESTÁ ENCOMENDADA A LA COMUNIDAD DE MADRID (AÑOS 2025-2027)” es necesaria e idónea para el cumplimiento y realización de los fines institucionales de la DG de Biodiversidad y Gestión Forestal de la Comunidad de Madrid y servirá de apoyo técnico puntual siendo que no se dispone en la actualidad de personal propio con la suficiente especialización.

Los trabajos del presente encargo, no cofinanciados con fondos europeos, sirven de apoyo puntual en la revisión y actualización del estado legal y cartografía asociada a los montes cuya gestión tiene encomendada la Comunidad de Madrid, redundando en beneficio de actuaciones directas que lleva a cabo la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal, como administración gestora de estos montes catalogados, así como otros trabajos cofinanciados con fondos europeos FEADER a través de determinadas intervenciones del Plan Estratégico de la PAC de España (PEPAC) 2023-2027.

Por otra parte, las actuaciones objeto del encargo se encuentran entre las funciones sociales de TRAGSATEC, de acuerdo con la Disposición Adicional 24ª punto 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Así, la letra a) del apartado primero: “La realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios agrícolas, ganaderos, forestales, de desarrollo rural, de conservación y protección del medio natural y medioambiental, de acuicultura y de pesca, así como los necesarios para el mejor uso y gestión de los recursos naturales. Igualmente podrán llevar a cabo la realización de todo tipo de actuaciones para la mejora de los servicios y recursos públicos, siempre y cuando no impliquen el ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos”. Y en el apartado segundo se indica que “TRAGSA y su filial TRAGSATEC también estarán obligadas a satisfacer las necesidades de las entidades del sector público de las que son medios propios personificados en la consecución de sus objetivos de interés público mediante la realización, por encargo de los mismos, de la planificación, organización, investigación, desarrollo, innovación, gestión, administración y supervisión de cualquier tipo de asistencias y servicios técnicos en los ámbitos de actuación señalados en el apartado anterior”.

Las actuaciones de encargo servirán de apoyo técnico puntual a los técnicos del Área de Conservación de Montes en el cumplimiento de sus funciones, mediante la comprobación de ubicaciones, elaboración de cartografía, unificación de las fuentes de información, el contraste del resultado con la realidad en el monte y la elaboración de notas resumen, todo ello en aras de facilitar y agilizar la elaboración de los informes necesarios por parte de los técnicos del área.

Por último, se dan las circunstancias extraordinarias previstas en el artículo 4 del Real Decreto 345/2025, de 22 de abril, que señala que “No podrán realizarse encargos que supongan la traslación del ejercicio de potestades públicas, no teniendo tal consideración, en ningún caso, los encargos de tareas de carácter meramente auxiliar o de contenido estrictamente técnico, siempre y cuando respondan a circunstancias extraordinarias que la Administración no pueda atender con sus propios medios personales y materiales y el órgano que realice el encargo se reserve el control, la inspección y la adopción de la decisión que ponga fin a los procedimientos administrativos”.

En Madrid, a fecha de pie de firma

LA DIRECTORA GENERAL DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Firmado digitalmente por: AGUILO VIDAL IRENE
Fecha: 2025.07.01 15:22